Denunciar no puede ser otro riesgo para las mujeres

Por Clara Luz Roldán, directora colegiada del Partido de la U

Ninguna mujer debería tener que escoger entre participar en política y proteger su integridad. Sin embargo, esa es la decisión que se les impone cuando reciben amenazas por aspirar a un cargo, ataques contra su vida privada para desacreditarlas o presiones para que abandonen una responsabilidad pública. Este 25 de noviembre debemos hablar de esa violencia y de la responsabilidad que tenemos quienes dirigimos organizaciones políticas para enfrentarla.

La violencia política contra las mujeres busca limitar su voz, debilitar su autoridad y cerrarles espacios de decisión. Quienes la ejercen, quieren que las mujeres nos quedemos en tareas "de mujeres", en lugar de romper techos de cristal, y eso, en el fondo, también es un machismo cultural. Sus consecuencias alcanzan a otras mujeres que observan lo ocurrido y se preguntan cuánto les costaría dar el mismo paso. Cada agresión que queda sin respuesta envía un mensaje sobre quién puede participar y bajo qué condiciones.

Las mujeres que ejercemos responsabilidades públicas debemos responder por nuestras decisiones, nuestros resultados y el uso de los recursos. La crítica y el debate hacen parte de esa responsabilidad. Las amenazas, el acoso, la sexualización, las burlas sobre el cuerpo y los ataques que buscan poner en duda nuestra capacidad por ser mujeres exigen una respuesta firme. Ninguna de estas agresiones puede justificarse como "el costo de hacer política".

Me preocupa especialmente lo que sucede cuando una mujer denuncia a alguien que tiene poder dentro de su propia organización. Puede enfrentar presiones para guardar silencio, temor a perder respaldo o la sospecha de que su queja terminará afectando su carrera. Cuando proteger una candidatura o una alianza pesa más que escuchar y atender una denuncia, el partido profundiza la vulnerabilidad de quien pidió ayuda.

Como directora colegiada del Partido de la U, considero que tenemos el deber de facilitar la denuncia, proteger la confidencialidad y asegurar que las quejas lleguen a las instancias competentes. También debemos promover condiciones para que las mujeres puedan continuar su actividad política mientras se tramitan sus casos, con respeto por el debido proceso y atención a los riesgos que enfrentan.

Nuestro Código de Ética contempla la atención prioritaria de los procesos por violencia contra las mujeres en política. Esa disposición debe traducirse en una ruta conocida y accesible. Una mujer debe saber dónde acudir, quién recibirá su queja, cómo conocerá el avance del trámite y qué puede hacer si recibe nuevas amenazas o presiones. La confianza se construye cuando esas preguntas tienen respuestas concretas.

La responsabilidad también está en las decisiones cotidianas. En las reuniones donde se toleran humillaciones. En las campañas donde se difunden ataques contra otra mujer. En los espacios donde se le exige demostrar una y otra vez su capacidad mientras se minimizan sus propuestas. Quienes ejercemos liderazgo debemos intervenir y dejar claro qué conductas son inaceptables.

Necesitamos partidos que respalden la participación de las mujeres durante toda su trayectoria, desde su primera reunión comunitaria hasta el ejercicio de un cargo público. Eso exige revisar nuestras prácticas, atender las denuncias y actuar frente a las represalias.

Quiero que más mujeres puedan aspirar, debatir, disentir y gobernar con libertad. Para lograrlo, debemos asumir una responsabilidad concreta frente a cada agresión. Ningún liderazgo, ninguna candidatura y ninguna conveniencia electoral justifican silenciar a una mujer. Denunciar debe abrir una puerta a la protección y a la justicia. También dentro de nuestros partidos.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el compromiso debe ser de cada uno para que se reproche a los violentos, pero no sólo a quienes ejercen la violencia física o armada, sino también a quienes, a través del ejercicio político, buscan cerrarle puertas a mujeres y sus liderazgos, a través de ataques bajos como los que hemos sufrido en Colombia alcaldesas, gobernadoras, concejalas, diputadas, congresistas o incluso ministras. Que nuestras acciones, nuestros resultados y nuestra gestión pública hable por nosotras, no las descalificaciones o intimidaciones de hombres violentos. No nos vamos a detener.